



Asamblea General

Distr. general
13 de junio de 2012
Español
Original: inglés

**Consejo de Derechos Humanos
Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria**

**Opiniones aprobadas por el Grupo de Trabajo sobre
la Detención Arbitraria en su 62º período de sesiones
(16 a 25 de noviembre de 2011)**

Nº 58/2011 (República Islámica del Irán)

Comunicación dirigida al Gobierno el 12 de octubre de 2011

Relativa a: Heshmatollah Tabarzadi

El Estado es parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

1. El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria fue establecido por la antigua Comisión de Derechos Humanos mediante su resolución 1991/42. El mandato del Grupo de Trabajo fue aclarado y prorrogado por la Comisión en su resolución 1997/50. El Consejo de Derechos Humanos asumió el mandato en su decisión 2006/102 y lo prorrogó por tres años mediante su resolución 15/18, de 30 de septiembre de 2010.

2. El Grupo de Trabajo considera arbitraria la privación de libertad en los casos siguientes:

a) Cuando es manifiestamente imposible invocar fundamento jurídico alguno que la justifique (como el mantenimiento en detención de una persona tras haber cumplido su condena o a pesar de una ley de amnistía que le sea aplicable) (categoría I);

b) Cuando la privación de libertad resulta del ejercicio de los derechos o libertades garantizados por los artículos 7, 13, 14, 18, 19, 20 y 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y, además, respecto de los Estados partes, por los artículos 12, 18, 19, 21, 22, 25, 26 y 27 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (categoría II);

c) Cuando la inobservancia, total o parcial, de las normas internacionales relativas al derecho a un juicio imparcial, enunciadas en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en los pertinentes instrumentos internacionales aceptados por los Estados interesados, es de una gravedad tal que confiere a la privación de libertad carácter arbitrario (categoría III);

d) Cuando los solicitantes de asilo, inmigrantes o refugiados son objeto de detención administrativa prolongada sin posibilidad de examen o recurso administrativo o judicial (categoría IV);

e) Cuando la privación de la libertad constituye una violación del derecho internacional por motivos de discriminación basada en el nacimiento, el origen nacional, étnico o social, el idioma, la religión, la condición económica, la opinión política o de otra índole, el género, la orientación sexual, la discapacidad u otra condición, y tiene por objeto hacer caso omiso de la igualdad de derechos humanos o puede causar ese resultado (categoría V).

Información recibida

Comunicación de la fuente

3. Según la fuente, el Sr. Heshmatollah Tabarzadi, de nacionalidad iraní, es el Secretario General del proscrito partido de oposición Frente Democrático del Irán. El Sr. Tabarzadi había sido antes Director del boletín estudiantil *Payam-e Daneshjou*, que al parecer fue prohibido tras las quejas de numerosos funcionarios gubernamentales. También era el Presidente de la Asociación de Estudiantes Islámicos y Jefe de Redacción del boletín semanal *Hoveyat-e-Khish*.

4. Según se ha informado, en la mañana del 27 de diciembre de 2009 el Sr. Tabarzadi fue detenido por la *Sepah-e-Pasdaran*, la Guardia Revolucionaria Iraní, rama del ejército iraní bajo el mando directo del Líder Supremo del Irán, el ayatolá Ali Jamenei. Al parecer, los oficiales encargados de la detención del Sr. Tabarzadi tenían una orden de detención general firmada por el Fiscal General. Los oficiales registraron la casa del Sr. Tabarzadi y se llevaron dos discos duros de computador, junto con documentos, artículos, libros y otros elementos.

5. Días antes de su detención, el 17 de diciembre de 2009, el Sr. Tabarzadi había publicado un artículo de opinión en el *Wall Street Journal* en relación con las protestas por los resultados de las elecciones presidenciales iraníes de 2009. La noche anterior a su detención, el Sr. Tabarzadi había sido entrevistado en la emisora Voice of America Persian en relación con las protestas de Ashura.

6. El Sr. Tabarzadi estuvo primero recluido en el pabellón 209 de la cárcel de Evin, en Teherán. Al parecer, fue golpeado y mantenido en régimen de aislamiento durante 40 días. La fuente señala que el Sr. Tabarzadi fue amenazado con la pena de muerte y tratos crueles, inhumanos y degradantes, incluida la violación. En mayo de 2010 el Sr. Tabarzadi fue trasladado a la cárcel de Rajae Shahr, ubicada en la ciudad de Karaj.

7. No fue hasta el 9 de junio de 2010, es decir, seis meses después de su detención, que el Sr. Tabarzadi compareció por primera vez ante un juez. En septiembre de 2010, el Sr. Tabarzadi fue condenado por el Tribunal Revolucionario Islámico que lo declaró culpable de los siguientes delitos: insultar al Líder; insultar al Presidente; difundir propaganda contra el sistema; reunirse y conspirar con la intención de perjudicar la seguridad del Estado; y alterar el orden público. Fue condenado a nueve años de cárcel y 74 latigazos, y le quedó prohibido participar en cualquier actividad social durante diez años.

8. En la apelación, tras haber sido parcialmente exonerado de los cargos de alteración del orden público y difusión de propaganda contra el sistema, su sentencia fue reducida a ocho años y la pena de flagelación fue revocada.

9. Según se ha informado, también los abogados del Sr. Tabarzadi, entre ellos la Sra. Nasrin Sotoudeh¹ y el Sr. Mohammad Oliyaefard fueron detenidos y condenados.

10. En primer lugar, la fuente sostiene que en el presente caso no existe ningún fundamento jurídico que justifique la privación de la libertad del Sr. Tabarzadi. El artículo 9, párrafo 2, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece que "toda persona detenida será informada, en el momento de su detención, de las razones de la misma, y notificada, sin demora, de la acusación formulada contra ella". El artículo 32 de la Constitución de la República Islámica del Irán prohíbe la detención arbitraria y exige que "si alguien es detenido, deben comunicarse y explicarse inmediatamente por escrito al acusado los cargos que se le imputan, junto con las razones que los fundamenten". La misma disposición establece que "dentro de un plazo máximo de 24 horas deberá remitirse a la autoridad judicial competente el expediente del caso y la documentación preliminar. Los procedimientos judiciales deberán iniciarse lo más pronto posible". Según la fuente, las autoridades iraníes no hicieron comparecer rápidamente al Sr. Tabarzadi ante un juez. Tampoco se le informó de los cargos que se le imputaban a pesar de haber estado detenido durante más de seis meses. Por otra parte, según informa la fuente, durante todo el proceso anterior al juicio y después de este, las autoridades iraníes hostigaron a los abogados del Sr. Tabarzadi y posteriormente los detuvieron.

11. En segundo lugar, la fuente sostiene que la privación de la libertad del Sr. Tabarzadi es una consecuencia directa de su ejercicio pacífico de los derechos y libertades reconocidos en los artículos 19 y 20 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y en los artículos 19, 21, 22 y 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. La fuente indica que la detención del Sr. Tabarzadi se produjo inmediatamente después de expresar en directo a través de la radio su apoyo a las manifestaciones pacíficas en el Irán, y menos de un mes después de haber publicado un artículo de opinión en el *Wall Street Journal* sobre el mismo tema. Según la información recibida, el Sr. Tabarzadi fue declarado culpable de infringir disposiciones del Código Penal Islámico claramente relacionadas con la expresión de opiniones críticas contra el Gobierno. La fuente sostiene que, en consecuencia, la única razón para detener y recluir al Sr. Tabarzadi era privarlo de su libertad de opinión y de expresión e impedir que criticara al Gobierno. Además, la fuente alega que su detención obedece directamente al ejercicio del Sr. Tabarzadi de sus derechos a la libertad de reunión y asociación pacíficas y al participar en la dirección de los asuntos públicos.

12. En tercer lugar, la fuente sostiene que las violaciones del derecho del Sr. Tabarzadi a un juicio imparcial eran de tal gravedad que hacían arbitraria la privación de su libertad. El Sr. Tabarzadi no tuvo acceso a un abogado durante los primeros 40 días de su reclusión en régimen de aislamiento ni durante el tiempo en que presuntamente fue sometido de forma reiterada a interrogatorios y malos tratos. Por otra parte, su derecho a asistencia letrada fue socavado aún más mediante el acoso y maltrato sistemáticos y continuos a que fueron sometidos sus abogados. En opinión de la fuente, cuando se presentaron cargos en contra del Sr. Tabarzadi, así como durante el proceso y en su interposición de recurso, se le impidió preparar adecuadamente su defensa, en presunta contravención del artículo 14, párrafo 3 b), del Pacto.

13. En conclusión, la fuente alega que la privación de libertad del Sr. Tabarzadi es arbitraria por carecer de todo fundamento jurídico, es una consecuencia directa del ejercicio de sus derechos y libertades dimanantes de la Declaración y del Pacto, y al ordenarla se cometieron infracciones graves de su derecho a un juicio imparcial.

¹ Véase Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, opinión N° 21/2011 (República Islámica del Irán).

Respuesta del Gobierno

14. Mediante carta de fecha 4 de noviembre de 2011, el Gobierno informó al Grupo de Trabajo de que el Sr. Tabarzadi había sido acusado de difundir propaganda contra el sistema de la República Islámica del Irán, insultar a los dirigentes del país, poner en peligro la seguridad nacional a través de la asociación ilícita, conspirar con la intención de perturbar la seguridad pública y alterar el orden público.

15. El Sr. Tabarzadi fue detenido el 28 de diciembre de 2009. Poco después, la Sala 26 del Tribunal Revolucionario de Teherán enjuició al acusado Sr. Tabarzadi, lo declaró culpable de todos los cargos y lo condenó a 1 año de pena *taziri* (en la jurisprudencia islámica, este término designa las penas cuya severidad es variable y está determinada, respectivamente, por la ley y por el juez) de cárcel por difundir propaganda contra el sistema de la República Islámica del Irán, 2 años adicionales de pena *taziri* de cárcel por insultar a los dirigentes del país, 5 años de pena *taziri* de cárcel por asociación y conspiración con la intención de poner en peligro la seguridad nacional, y 1 año de pena *taziri* de 74 latigazos por alterar el orden público mediante la participación en reuniones ilegales.

16. Durante su juicio, el Sr. Tabarzadi fue defendido por un equipo de abogados, a saber, el Sr. Mohammad Oliyaefard, el Sr. Abdolfattah Soltani, el Sr. Jahangir Mahmoudi, la Sra. Nasrin Sotoudeh, la Sra. Giti Pourfazel y la Sra. Sara Najibi.

17. La sentencia inicial del Tribunal fue apelada por el Sr. Jahangir Mahmoudi. El 1º de enero de 2011, el Tribunal de Apelación de Teherán rechazó el recurso interpuesto, pero exoneró al Sr. Tabarzadi del cargo concreto de "alterar el orden público mediante la participación en reuniones ilegales".

18. Antes de su última detención —y a partir de 1996— el Sr. Tabarzadi había sido condenado por delitos diferentes, entre ellos el de difundir propaganda contra el sistema de la República Islámica del Irán. En esos casos, dos de las penas *taziri* de cárcel impuestas al Sr. Tabarzadi fueron sustituidas por multas y, en otro caso, se le impuso una pena de cárcel con suspensión del cumplimiento. Además, en 2004 el Tribunal Revolucionario de Teherán dictó contra el Sr. Tabarzadi una sentencia condenatoria de 14 años de pena *taziri* de cárcel, sentencia que fue impugnada por su abogado. El caso fue reexaminado por el Tribunal de Apelación de Teherán, y más tarde por el Tribunal Supremo. En última instancia, el Sr. Tabarzadi fue condenado a 9 años de pena *taziri* de cárcel y le quedó prohibido participar en actividades sociales durante 10 años.

19. El Gobierno sostiene que, a pesar de haber sido condenado mediante sentencia firme, el Sr. Tabarzadi pudo salir de la cárcel por razones humanitarias basadas en el islam. Sin embargo, el Sr. Tabarzadi abusó de su libertad condicional y rompió su promesa de abstenerse de poner en peligro la seguridad nacional participando en actividades que atentaban contra los intereses superiores del sistema de la República Islámica del Irán. El Gobierno añade que en la actualidad el Sr. Tabarzadi está cumpliendo su condena y, al igual que otros presos, disfruta de sus derechos legales.

Comentarios adicionales de la fuente

20. En opinión de la fuente, la respuesta del Gobierno no responde a las cuestiones esenciales planteadas en la comunicación, entre ellas las siguientes:

a) El Gobierno no tenía ningún fundamento legal que justificara la detención y reclusión del Sr. Tabarzadi. La legislación iraní exige que se proporcione al acusado acceso a un abogado durante cualquier interrogatorio llevado a cabo por las fuerzas del Gobierno y que se le informe de los cargos que se le imputan inmediatamente después de la detención. El Gobierno denegó al Sr. Tabarzadi estos derechos.

b) Tras haber sido detenido, el Sr. Tabarzadi fue mantenido en régimen de aislamiento durante aproximadamente 40 días, durante los cuales no se le proporcionó acceso a un abogado.

c) Durante por lo menos seis meses después de su detención y reclusión, no se informó al Sr. Tabarzadi de los cargos que se le imputaban.

d) El Gobierno sometió a los abogados del Sr. Tabarzadi a intimidación y acoso constantes, incluido el encarcelamiento, antes, durante y después de su juicio y de la apelación. Como resultado de ello, efectivamente se denegó al Sr. Tabarzadi la asistencia letrada y se le impidió preparar adecuadamente su defensa en el juicio y en la apelación.

e) El Gobierno detuvo al Sr. Tabarzadi en un esfuerzo por castigarlo por ejercer los derechos y libertades garantizados por la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Esto queda demostrado por el hecho de que fue detenido menos de un día después de haber expresado a través de la radio su apoyo a las manifestaciones pacíficas en el Irán, y menos de un mes después de haber publicado un artículo de opinión en el *Wall Street Journal* sobre el mismo tema.

f) Antes de su reclusión y durante ella, los agentes del Gobierno sometieron al Sr. Tabarzadi a maltrato físico, tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes.

21. En opinión de la fuente, al no responder a estos argumentos fundamentales, el Gobierno no rebate la presunción razonable de arbitrariedad establecida en la comunicación relativa al Sr. Tabarzadi, en que se señala que su privación de la libertad corresponde a las categorías I, II y III de la clasificación de casos elaborada por el Grupo de Trabajo. En lugar de ello, la respuesta del Gobierno hace de forma categórica dos aseveraciones: 1) sugiere que el Sr. Tabarzadi fue defendido por un equipo de abogados durante el juicio y la apelación; y 2) enumera los delitos de los que se acusó al Sr. Tabarzadi y por los que se lo condenó.

22. En cuanto a la primera aseveración, como se describe en la comunicación —y no rebate el Gobierno—, aunque el Sr. Tabarzadi obtuvo asistencia letrada, el Gobierno del Irán sometió a sus abogados a hostigamiento y reclusión constantes. Asimismo, el Gobierno detuvo a dos de los abogados del Sr. Tabarzadi, la Sra. Nasrin Sotoudeh y el Sr. Mohammad Oliyaefard, y los condenó a penas de prisión, en parte por haber representado al Sr. Tabarzadi. El Gobierno también hostigó y recluyó a tres de los otros abogados del Sr. Tabarzadi, el Sr. Jahangir Mahmoudi, la Sra. Giti Pourfazel y el Sr. Abdolfattah Soltani, privando una vez más al Sr. Tabarzadi de una asistencia letrada efectiva.

23. La fuente sostiene que afirmar de manera superficial que una persona tiene acceso a un abogado no es suficiente para salvaguardar su derecho a recibir asistencia letrada y preparar su defensa, consagrado en las disposiciones del artículo 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el artículo 14, párrafo 3, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el principio 18, párrafos 1 y 2, del Conjunto de Principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión². Cuando hay injerencias del Estado a este respecto, el derecho a recibir asistencia letrada y preparar la defensa queda efectivamente denegado.

24. En cuanto a la segunda aseveración, la fuente señala que una enumeración de los delitos por los que se acusa y se condena a una persona no es suficiente para refutar los indicios razonables de que se la está privando de sus libertades. Con limitarse a recitar los delitos por los que se acusa y se condena al Sr. Tabarzadi, el Gobierno no rebate la

² Resolución 43/173 de la Asamblea General, anexo.

presunción razonable de la arbitrariedad de la denegación de sus derechos y libertades expuesta en la comunicación.

25. La fuente reitera que la privación de la libertad del Sr. Tabarzadi se inscribe en las categorías I, II y III de la clasificación de los casos de arbitrariedad establecida por el Grupo de Trabajo.

Deliberaciones

26. El Grupo de Trabajo observa que el Sr. Tabarzadi fue detenido el día después de que fuera entrevistado en la emisora Voice of America Persian en relación con las protestas de Ashura, y diez días después de que fuera publicado en el *Wall Street Journal* su artículo de opinión sobre las protestas por los resultados de las elecciones presidenciales del Irán.

27. El Gobierno no ha proporcionado información sobre ninguno de los actos concretos presuntamente llevados a cabo por el Sr. Tabarzadi que, por constituir delitos, habían dado lugar a su condena. En lugar de ello, la respuesta del Gobierno se limita a enumerar los delitos por los que fue condenado el Sr. Tabarzadi. En opinión del Grupo de Trabajo, esta lista no es suficiente para refutar la correlación auténtica entre la entrevista y el artículo de opinión del Sr. Tabarzadi y su posterior detención y reclusión.

28. El Grupo de Trabajo observa que durante los seis meses que transcurrieron después de la detención no se permitió al Sr. Tabarzadi comparecer ante ningún juez ni autoridad competente alguna ni impugnar la legalidad de su detención, ni tampoco se le informó de los cargos formulados en su contra.

29. El Gobierno no ha refutado la alegación de que, aunque el Sr. Tabarzadi recibió asistencia letrada oficial, las autoridades sometieron a sus abogados a acoso y encarcelamiento ordinario durante todo el proceso que precedió y siguió a su juicio.

30. De hecho, en su opinión N° 21/2011, el Grupo de Trabajo determinó que la privación de libertad de uno de los abogados del Sr. Tabarzadi, la Sra. Nasrin Sotoudeh, había sido arbitraria por cuanto contravenía los artículos 9, 10, 19, 20 y 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y los artículos 9, 14, 19, 21 y 22 del Pacto. Por otra parte, el Gobierno no ha refutado la alegación de que otro de los abogados del Sr. Tabarzadi, el Sr. Mohammad Oliyaefard, también fue detenido y encarcelado, en parte por representar al Sr. Tabarzadi. Tampoco ha refutado las otras alegaciones de que el Gobierno ha hostigado y recluso a tres de los otros abogados del Sr. Tabarzadi, a saber, el Sr. Jahangir Mahmoudi, la Sra. Giti Pourfazel y el Sr. Abdolfattah Soltani.

31. El derecho a ser defendido eficazmente por un abogado, conforme a lo dispuesto en el artículo 14, párrafo 3, del Pacto, es una de las características fundamentales de un juicio imparcial. Por esta razón, el Grupo de Trabajo considera que el hecho de impedir que los abogados cumplan sus funciones efectiva y oportunamente constituye una grave violación del derecho fundamental a un juicio imparcial.

32. En consecuencia, el Grupo de Trabajo concluye que la detención y reclusión del Sr. Tabarzadi contraviene los derechos y libertades fundamentales establecidos en los artículos 9, 10, 11, 18, 19 y 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y en los artículos 9, 14 y 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el que es parte la República Islámica del Irán.

Decisión

33. En vista de lo anterior, el Grupo de Trabajo emite la siguiente opinión:

La privación de libertad del Sr. Tabarzadi es arbitraria, por cuanto contraviene los artículos 9, 10, 11, 18, 19 y 21 de la Declaración Universal de

Derechos Humanos y los artículos 9, 14 y 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y se inscribe en las categorías II y III aplicables al examen de los casos presentados al Grupo de Trabajo.

34. Por consiguiente, el Grupo de Trabajo solicita al Gobierno que adopte las medidas necesarias para remediar la situación del Sr. Tabarzadi y compatibilizarla con las normas y estándares establecidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Declaración Universal de Derechos Humanos.

35. El Grupo de Trabajo considera que, teniendo en cuenta todas las circunstancias del caso, el remedio adecuado sería poner en libertad al Sr. Tabarzadi y concederle el derecho efectivo a obtener reparación de conformidad con el artículo 9, párrafo 5, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

36. El Grupo de Trabajo referirá las alegaciones de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes del Sr. Tabarzadi al Relator Especial sobre la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, de conformidad con el párrafo 33 a) de sus métodos de trabajo.

[Aprobada el 18 de noviembre de 2011.]
